

Los informes nacionales alternativos arrojan luz sobre las desigualdades

POR ROBERTO BISSIO, SOCIAL WATCH¹

La Agenda 2030 y sus compromisos universales para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades dentro de los límites planetarios son inspiradores y en todo el mundo la gente espera que sus gobiernos y el sistema internacional cumplan sus promesas. Los informes de los gobiernos a la ONU son voluntarios y no son objeto de ningún comentario u evaluación internacional oficial, pero la sociedad civil ejerce su papel de vigilancia de múltiples maneras. “Informes luz” independientes de grupos ciudadanos iluminan los obstáculos y las discrepancias en las políticas públicas.

Los informes nacionales de la sociedad civil promovidos y compilados por Social Watch muestran claramente que si bien las circunstancias y capacidades son únicas en cada país, abundan los temas comunes: las desigualdades, a menudo exacerbadas por el marco de políticas internacionales, no se reducen, la pobreza se subestima u oculta pero no es erradicada, la sostenibilidad se sacrifica al extractivismo.

Como la Agenda 2030 es universal, la sociedad civil en los países más ricos también aprovecha la oportunidad para debatir sobre las políticas nacionales y su impacto extraterritorial. Estos aportes son bienvenidos. Por un lado recuerdan la responsabilidad mayor de quienes más contribuyeron a crear los problemas y más capacidad tienen de resolverlos. Por otro nos desafían a abrir espacios para todas las voces, en especial las de aquellos a quienes se les prometió que no quedarían atrás.

Al comienzo de un taller sobre informes nacionales alternativos en América Latina y el Caribe, el facilitador (que fue el autor de esta contribución) pidió a los participantes que calificaran, en una escala de cero a diez, el impacto esperado de los informes de la sociedad civil en la formulación real de políticas. Las respuestas oscilaron entre dos y cuatro, sumergiendo la sala bajo una nube de duda y escepticismo: ¿por qué unos cuarenta líderes de prestigiosas ONG y amplias coaliciones de la sociedad civil perderían horas preciosas preparándose para un ejercicio inútil? “El gobierno probablemente no se moverá ni un centímetro debido a nuestro informe”, observó con franqueza un organizador de cooperativas centroamericanas, “pero aún así, daré diez puntos al proceso de concertación de la sociedad civil, estudiando los problemas

y acordando una plataforma común a través de un informe alternativo”.

Esta percepción de la importancia de articular sus demandas motiva a los grupos de ciudadanos a comentar, desafiar o interpelar a sus gobiernos y presentar sus puntos de vista alternativos ante las Naciones Unidas cada vez que se reúne el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible para evaluar la implementación de la Agenda 2030.

Los ‘informes luz’ (término que cada vez más es preferido sobre la anterior designación de ‘informes sombra’) provienen de todos los continentes y de países con capacidades muy diferentes. Sin embargo, en 2018 hay un problema que se destaca en la mayoría de ellos: las desigualdades.

¹ Todos los informes de la sociedad civil citados en este artículo están disponibles en el sitio web del informe “Spotlight”: www.2030spotlight.org.

El extractivismo colonial es la raíz de la asimetría de poder en Kenia

Desde **Kenia**, por ejemplo, la red ciudadana SODNET informa que “la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres sigue socavando la confianza en las instituciones de gobernanza democrática de la economía y, junto con ella, el imperativo de la cohesión social como condición para el desarrollo sostenible”.

Edward Oyugi, J. Ocholla y Mwaura Kaara informan que “Kenia todavía vive con desasosiego un pasado colonial y su legado de desarrollo desigual. Una aguda asimetría de relaciones de poder perdura, ya que el sistema colonial se retiró con una estrategia que no resultó en una transformación sistémica de las sociedades coloniales. “El país fue estructurado económicamente por primera vez por la Asociación Británica de África Oriental, principalmente en torno a sus intereses económicos extractivos. La luchaba por “la descolonización quería que todos los sectores de la sociedad keniana prosperasen buscando un desarrollo social equilibrado”, pero “las semillas de la desigualdad y la trayectoria del desarrollo desigual permanecieron intactas” y “las disparidades experimentaron una rápida escalada después de la independencia.”

El informe concluye que la democracia y el desarrollo sostenible siguen siendo “un sueño” porque “la cultura y la práctica de la corrupción han crecido profundamente, tienen raíces duraderas en la sociedad de Kenia y se han vuelto endémicas” y permiten la concentración de la riqueza dentro de los círculos gobernantes. El liderazgo político y burocrático se beneficia de ello “y las instituciones de gobernanza existentes o se desentienden o carecen de la voluntad y la capacidad para evitar que lo hagan”.

La desigualdad aumentará en el Reino Unido

Mientras tanto, en el **Reino Unido**, un proceso de consulta coordinado por la red de Stakeholders for Sustainable Development (UKSSD) del Reino Unido observa que “se prevé un aumento de la desigualdad en los próximos años”. Paradójicamente, la tasa de desempleo está llegando a un mínimo histórico, pero “al mismo tiempo, los recortes impositivos y de

seguridad social introducidos desde 2012 han tenido un efecto particularmente grave en las personas con ingresos más bajos. Los hogares de minorías étnicas, las familias con al menos un miembro discapacitado y los padres solos (que son abrumadoramente mujeres) han sufrido desproporcionadamente”.

Un miembro de la red, Just Fair, dirigió la redacción del capítulo de la sociedad civil sobre el ODS 10 sobre la reducción de la desigualdad a nivel nacional y destaca el hecho de que, gracias a la Ley de Igualdad de 2010, “las autoridades se reúnen y reportan de manera transparente datos desglosados”. Sin embargo, los sucesivos gobiernos no han implementado esta Ley. El deber está en vigor en Escocia desde abril de 2018, Gales tiene el poder de seguir su ejemplo, algunos consejos lo están implementando voluntariamente y 78 miembros del Parlamento de cinco partidos diferentes están pidiendo al gobierno que haga efectivo el deber.

El informe concluye: “Se requiere un cambio de rumbo significativo para cumplir el ODS 10 y los derechos socioeconómicos internacionalmente reconocidos y para convertir al Reino Unido en una sociedad justa que no deje a nadie atrás”.

Los flujos ilícitos privan a Bangladesh de recursos escasos

En **Bangladesh**, la sociedad civil celebra que en marzo de 2018 el país cumplió con los requisitos para “graduarse” de su estado actual de país menos adelantado y ser incluido oficialmente como “en desarrollo”. Este éxito “genera confianza para lograr también los ODS”, según el informe de COAST Trust, secretaria de Social Watch-Bangladesh. Sin embargo, el informe identifica tres desafíos principales: desigualdades, cambio climático y flujos financieros ilícitos.

Las desigualdades en el ingreso son notables entre las áreas rurales y urbanas, entre las diferentes regiones y entre el 5 por ciento de los hogares que capta la cuarta parte del ingreso nacional, mientras que el 5 por ciento inferior recibe menos del 1 por ciento.

En la región costera de Bangladesh, una quinta parte del país y hogar de más de 50 millones de personas,

la mayoría de ellas viviendo por debajo del umbral de pobreza, la intrusión de salinidad y una grave crisis de agua están causando rendimientos más bajos y escasez de agua potable, poniendo en peligro medios de subsistencia. Cada año, miles de personas afectadas migran y se refugian en los barrios marginales urbanos de las ciudades, especialmente en Dhaka y Chittagong. El gobierno se ha comprometido a proteger a las personas costeras a través de infraestructura crítica como terraplenes y pólderes, pero el enfoque tradicional actual se centra en la infraestructura de desarrollo orientada al crecimiento, como las instalaciones de transporte y las zonas de procesamiento de exportaciones.

Bangladesh es una víctima inocente del calentamiento global, no es responsable de su aumento y de una capacidad financiera limitada para mitigarlo. Por lo tanto, la sociedad civil considera que es un “derecho legítimo especial” recibir más apoyo “de aquellos países desarrollados que históricamente son responsables de las emisiones de carbono y el calentamiento global”.

La movilización de recursos internos se ve aún más obstaculizada por las salidas financieras ilícitas del sector empresarial y, en particular, de las empresas multinacionales. El informe Global Financial Integrity de 2015 estimó que se transfirieron más de US \$ 55.88 mil millones de Bangladesh a países extranjeros entre 2003 y 2014, lo que representa aproximadamente 1.5 veces el presupuesto nacional y alrededor de 12 veces más que la ayuda externa recibida en este período. Los depósitos de Swiss Bank y la adquisición de segundas residencias en Malasia son las técnicas preferidas de lavado de dinero.

Se necesita coordinación y apoyo global para detener la evasión fiscal, pero el Proyecto BEPS (Erosión de Base y Cambio de Utilidades), iniciado por la OCDE y el G20, no incluye a los países menos desarrollados, o aquellos recién graduados, como Bangladesh. Por lo tanto, las OSC de Bangladesh exigen que se mejore el Comité Tributario de la ONU, mejores leyes de transparencia tributaria local y normas internacionales que reduzcan la tendencia a “caer en picado” por los países en favor del capital extranjero.

Suiza atrae ganancias generadas en otros lugares

El informe sobre Suiza de la coalición de ONG Alliance Sud se hace eco de estos comentarios negativos y afirma que: “La política económica exterior suiza y su política financiera y fiscal internacional aún están lejos de tener suficientemente en cuenta los requisitos de la Agenda 2030”. Una visita a Suiza, experto independiente de la ONU sobre deuda externa y otras obligaciones financieras Juan-Pablo Bohoslavsky llamó la atención en un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre las deficiencias en la prevención de flujos financieros injustos y problemas en el área de impuestos corporativos internacionales: “El los privilegios suizos existentes para los beneficios extranjeros de las corporaciones multinacionales ... crean incentivos masivos para las transferencias de ganancias a Suiza y ayudan a privar a los países en desarrollo de posibles ingresos fiscales en cientos de miles de millones. “Alliance Sud observa que” en el impuesto corporativo suizo previsto reforma, el Consejo Federal planea abolir los privilegios fiscales anteriores, pero tiene la intención s para reemplazarlos con medidas que finalmente tengan el mismo efecto: para las corporaciones multinacionales, seguirá siendo atractivo a efectos fiscales transferir las ganancias del exterior -en particular de los países más pobres- a Suiza”.

El informe de las OSC suizas critica especialmente la asignación de recursos a nivel nacional: “En 2017, el número de personas afectadas por la pobreza en Suiza ha aumentado por segundo año consecutivo y se están recortando los fondos públicos en apoyo de los más pobres. Esto es inaceptable, dado un superávit gubernamental de 5.000 millones de francos suizos”.

Finlandia no ve su huella

En sus informes sobre Finlandia, la plataforma de las organizaciones de la sociedad civil Kepa también se preocupa por el impacto extraterritorial de la producción nacional y los patrones de consumo. “Por ejemplo, casi la mitad de la huella hídrica de los finlandeses es causada por cadenas de producción fuera de Finlandia”, concluyen. A Kepa le preocupa que “el grupo que seleccionó los indicadores

nacionales haya observado sorprendentemente que en Finlandia no hay información confiable ni siquiera parcialmente completa sobre los impactos externos del consumo finlandés, es decir, cómo explotamos los recursos naturales fuera de nuestro propio país”.

El Ministerio de Finanzas de Finlandia inició una evaluación del presupuesto nacional desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Sin embargo, el trabajo inicial se juzga “bastante modesto”. La propuesta de presupuesto para 2019 se calculará principalmente desde la perspectiva del cambio climático y se centrará en los planes para que Finlandia se convierta en carbono neutral después de haber alcanzado un máximo histórico en emisiones de carbono en 2017. Keva considera que es “necesario ampliar el enfoque”. de tener en cuenta el desarrollo sostenible en la planificación del presupuesto “para cubrir otros asuntos” y para mirar con valentía el apoyo fiscal a los combustibles fósiles y otras actividades que pueden incluso entrar en conflicto con el desarrollo sostenible”.

Observaciones amargas de Benín

En **Benin**, la red Social Watch-Benin estableció cuatro grupos de trabajo (social, económico, ambiental y de gobierno) para redactar un informe paralelo a la Revisión Nacional Voluntaria del gobierno que revisó 33 objetivos prioritarios seleccionados de cada uno de los seis ODS a ser revisados en el HLPF en 2018. Los indicadores estaban disponibles solo para seis de estos. La red concluye que, si bien los ODS “se han incorporado al Programa de Acción del gobierno y los proyectos iniciados por los socios de la cooperación para el desarrollo”, la falta de “un sistema de información eficiente capaz de ilustrar sobre la implementación” conlleva “observaciones amargas”. sucedió con otros compromisos y convenciones internacionales”.

Francia no logra sinergizar

En **Francia**, un Comité Directivo de Alto Nivel para la implementación de los ODS celebró su primera reunión en abril de 2018 como un foro para debatir y construir colectivamente, con actores públicos y pri-

vados, una “hoja de ruta” que se emitirá en el otoño de 2019. movimiento fue aplaudido por el Cuarto Movimiento Mundial ATD por ser incluyente, pero también criticado por “llegar tarde”.

La sociedad civil presentó varias sugerencias al “informe de hitos” oficial francés que se presentará a la ONU en 2018, cubriendo seis de los 17 ODS y ATD. Cuarto Mundo encuentra “muy poco esfuerzo para sinergizar los diversos objetivos, mientras que estos llamados” los objetivos ambientales tienen un gran impacto el uno en el otro. Por ejemplo, podemos lamentar que no se vea que estos objetivos tengan un impacto en el ODS 1. El objetivo de superar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo no es una preocupación importante en el informe francés, mientras que es transversal. En esta etapa de redacción, el “informe de hitos” relativo al ODS 6 sobre el agua no menciona que el acceso al agua es una condición esencial para reducir la pobreza, al igual que el ODS 7 y el acceso a la energía. Del mismo modo, la recomendación fundamental de “no dejar a nadie atrás” no se traduce en la implementación de los ODS”.

El Movimiento espera “que la aplicación de cada ODS llegue a los más pobres, tanto en el territorio nacional como en la cooperación internacional para el desarrollo de Francia” y hace campaña en particular sobre el desempleo (actualmente 9 por ciento en Francia) exigiendo “acceso a trabajar como un derecho, como el derecho a la educación o el derecho a la seguridad social”.

La austeridad socava los ODS de España a Jordania

España está preparando su primera Revisión Nacional Voluntaria que se presentará en 2018. Se ha creado un Grupo de Alto Nivel (GAN) y se ha anunciado un Plan de Acción 2018-2020. El informe alternativo de La Mundial lamenta la falta de diálogo sobre los ODS entre el gobierno y las partes interesadas, como la academia y la sociedad civil. Se considera que España comienza tarde para tomar nota de la Agenda 2030 y la sociedad civil percibe que la GAN no tiene la condición política requerida ni la participación de ministros clave. Además, el GAN no está involucrando a la sociedad civil y la elaboración de un plan para promover e implementar la Agenda 2030 no con-

templa la participación democrática de los actores sociales y políticos o un marco transparente para el diálogo.

Se teme que las políticas requeridas para alcanzar los ODS se vean socavadas por la continuidad de las políticas de austeridad fiscal y la reducción de los derechos que están alejando a España de los objetivos y metas acordados.

La austeridad es una preocupación importante también en los informes de Jordania, Argentina y Brasil.

En **Jordania**, según el informe de Ahmad M. Awad, del Centro Phenix, “En 2016 se inició una nueva serie de medidas destinadas a lograr la ‘consolidación fiscal’ como condición para desbloquear el acceso a la ayuda del FMI. Se implementaron medidas de austeridad adicionales, lo que provocó aumentos en los precios del combustible, así como en los impuestos a las ventas y las aduanas”.

Casi la mitad de la fuerza laboral jordana trabaja en la economía informal, lo que junto con “la implementación continua de políticas laborales favorables a las empresas, resultó en un aumento del desempleo”. Muchos comenzaron a ver amenazada su capacidad para pagar los productos básicos, una situación llamada “pobreza transitoria”. Entre los trabajadores no calificados, oleadas de trabajadores migrantes y refugiados (muchos desesperados) han saturado el mercado -uno de los cuales casi no está sujeto a restricciones salariales mínimas- lo que provoca una carrera hacia el fondo. “Al mismo tiempo,” numerosas instituciones políticas y legislativas habían sido severamente debilitado. El impacto de la sociedad civil en el debate sobre políticas públicas había desaparecido, y casi todas las instancias de diálogo social sobre cuestiones laborales parecían predeterminadas en favor de los empleadores “y” las posibilidades de un diálogo social productivo y el desarrollo de políticas basadas en los acuerdos entre trabajadores, empleadores y gobierno parecen cada vez más distantes”.

Por lo tanto, las políticas “han sido repetidamente prescritas, recomendadas y defendidas por el FMI [que] en su mayor parte han impactado desproporcionadamente a los segmentos más pobres de la población del país”. Si bien esto contradice claramente los ODS, “parece que los socios bilaterales y multilaterales de Jordania permanecen ajenos o reacios a reaccionar a este hecho, así como a la erosión de la supervisión democrática a través de la acumulación de poder, bajo la supervisión de una institución financiera internacional”.

La pobreza vuelve a Argentina y Brasil

En **Argentina**, que actualmente es el anfitrión de la presidencia del G20, más del 10 por ciento de los hogares no están conectados a una red de suministro de agua limpia y más del 30 por ciento carecen de saneamiento. La inversión en agua y saneamiento fue estable en alrededor del 2 por ciento del gasto público entre 2012 y 2015. Bajó al 1,4 por ciento en 2016 y al 0,3 por ciento en 2017, meses antes de que el presidente Mauricio Macri anunciara en mayo de 2018 la solicitud de un préstamo de emergencia del FMI que podría resultar en austeridad fiscal con nuevos recortes en los presupuestos.

El informe de CELS y FOCO registra una caída similar en el gasto público en vivienda y un cambio en cómo el Estado percibe su rol “de” constructor “a” facilitador “de la inversión del sector privado”. Sin embargo, “la experiencia latinoamericana (estudiada en Chile, Costa Rica y México) muestra que restringir las políticas públicas a la promoción del financiamiento hipotecario, con asistencia focalizada en las áreas más pobres y dejar a los mercados las decisiones clave sobre el desarrollo urbano y la vivienda más especulación en torno a los precios, profundiza las brechas urbanas y la segregación social”.

En **Brasil**, después de más de una década de progresos significativos en la lucha contra la pobreza a través de inversiones públicas en salud, educación y protección social, la enmienda constitucional 95/2016 (CA 95), conocida como la “Regla de gasto”, entró en vigor en 2017, congelándose el gasto público por 20 años. “Al constitucionalizar la austeridad de esta manera”, comenta el informe del INESC, “a los futuros

gobiernos elegidos se les impedirá determinar democráticamente el tamaño de los derechos humanos y las necesidades básicas de inversión”.

La norma CA 95 ya ha comenzado a “afectar desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos” ya que “se desvían recursos significativos de los programas sociales hacia los pagos del servicio de la deuda”. Estas decisiones fiscales “ponen en riesgo los derechos sociales y económicos básicos de millones de brasileños, incluidos los derechos a la alimentación, la salud y la educación, la implementación de los ODS, al tiempo que agravan las desigualdades de género, raciales y económicas”. También podrían constituir una violación masiva de los derechos sociales y económicos, ya que “el gobierno brasileño no ha demostrado que la CE 95 sea necesaria, proporcionada y una medida de último recurso, ni que se hayan explorado y analizado medidas alternativas menos restrictivas”. De hecho, NESC, CESR y Oxfam argumentan que las alternativas, como los impuestos más progresivos y la lucha contra los abusos fiscales, están fácilmente disponibles.

Los derechos son el punto de partida en México y Ecuador

Los derechos humanos son también el punto de partida para la crítica de la sociedad civil a las políticas oficiales en **México**. Las organizaciones de la sociedad civil mexicana exigen coherencia entre la Agenda 2030 y las políticas gubernamentales en materia económica y energética. Afirman que la reforma en curso del sector energético prioriza las actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad en los territorios y sin las salvaguardias necesarias que protegen eficazmente el agua, el patrimonio biocultural, la salud de las personas y las comunidades.

Como resultado del examen realizado en marzo de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomienda que el Estado mexicano tenga plenamente en cuenta sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y garantice la el pleno disfrute de los derechos reconocidos en él en la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional.

También alienta al Estado a establecer mecanismos independientes para monitorear el progreso y tratar a los beneficiarios de los programas públicos como titulares de los derechos a los que tienen derecho.

Las organizaciones de la sociedad civil de **Ecuador** han señalado a la atención de los organismos de derechos humanos casos de conflicto entre las industrias extractivas y las comunidades indígenas. En agosto de 2017, se instó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas para que investigara la situación de varias familias de la comunidad Shuar desplazadas ilegalmente por el proyecto minero de cobre San Carlos Panantza en la región amazónica. Cuatro provincias amazónicas (Napó, Orellana, Pastaza y Morona Santiago) se ven afectadas por las exploraciones petroleras en una superficie total de cuatro millones de hectáreas. El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CERV) está preocupado de que el proceso de consulta con cientos de comunidades indígenas en esa gran área no haya sido conducido adecuadamente. (ver también el Recuadro 0.2 sobre la necesidad de incluir a los pueblos indígenas en todas las áreas de implementación de los ODS).

Debilitamiento de la protección ambiental en Colombia

En la vecina **Colombia**, un informe de Angélica Beltrán, Karla Díaz y David Cruz, investigadores de la Asociación Ambiente y Sociedad argumentan que “las industrias extractivas y la contaminación atmosférica en las ciudades son una fuente importante de conflictos socioambientales”. El informe dice: “La protección del medio ambiente muestra un debilitamiento progresivo ... Debido a la falta de información ambiental actualizada y la simplificación de los procedimientos para otorgar permisos y licencias, a las comunidades afectadas les resulta cada vez más difícil controlar las amenazas sobre sus tierras y sus medios de subsistencia”. Además, las instituciones de control ambiental no tienen la capacidad de supervisar adecuadamente las actividades extractivas, lo que ha permitido ecodios graves como el afloramiento de petróleo crudo en el Bloque Lizama y la violación de las normas ambientales por parte de Emerald Energy en el Bloque Ombu, ubicado en la región amazónica.

De hecho, el marco regulatorio favorece las actividades extractivas a través de medidas tales como la creación de áreas de concesiones mineras rápidas, la apertura de bloques petroleros alrededor de los Parques Naturales nacionales y la manipulación territorial para permitir actividades que violen los acuerdos internacionales para la protección y conservación de el Amazonas. El aumento en la tasa de deforestación, el aumento en el número de permisos de exploración y extracción petrolera y las demoras en la implementación de estrategias de control de deforestación han llevado al gobierno colombiano a posponer el objetivo de cero deforestación neta en el Amazonas, inicialmente establecido para 2020 y ahora extendido hasta 2030.

Guatemala no cobra impuestos

Mientras tanto, en **Guatemala** la principal queja sobre el Estado es su ausencia. “Tenemos la sensación de que no hay gobierno”, informa Helmer Velazquez, director de la asociación de cooperativas y ONGs Congcoop, “porque los impuestos son muy bajos y los ‘captadores del estado’ ni siquiera los pagan, gracias a

las exenciones de impuestos o a los impuestos. evitación, que deja la hipoteca de los recursos naturales como la única fuente de financiación”.

“Esto no sería un problema si no tuviéramos siete millones de personas viviendo en la pobreza: ¡la mitad de la población! Y la pobreza es extrema para tres millones de ellos. Muy tranquilo, el gobierno informó en 2017 sobre el “progreso institucional” al vincular los ODS con el plan nacional de desarrollo K’atun 2032. En términos sustantivos, nada”.

La sociedad civil exige una reforma fiscal y una reorientación del gasto público, que propone una inversión masiva en la agricultura familiar como forma de desatar círculos virtuosos sobre el empleo y la alimentación y cumplir así las metas y los objetivos fijados para 2030.

La comida es la clave en Nepal

La alimentación es también el eje del informe de la sociedad civil de **Nepal**, donde “las empresas transnacionales están acaparando tierras, monopolizando semillas y mercados de alimentos, como resultado de lo cual los pequeños agricultores están cada vez más marginados”. Como evidencia visible, “ahora en Nepal las comidas empacadas son comunes no solo en los municipios urbanos sino también en áreas remotas y de difícil acceso, reemplazando los patrones de consumo de alimentos indígenas. Los agricultores dependen en gran medida de los mercados de semillas en lugar de preservar sus propias semillas, que eran prácticas comunes en Nepal incluso hace unos años”.

La calidad de los alimentos se degradante porque los agricultores usan pesticidas y fertilizantes químicos. Esto crea problemas de salud e, incluso cuando la disponibilidad de alimentos ha mejorado, la oferta es inadecuada para satisfacer la creciente demanda de alimentos. La dependencia de las importaciones de cereales ha ido en aumento, mientras que la capacidad de Nepal para exportar alimentos ha estado disminuyendo. Esto también puede vincularse con la gran emigración entre los jóvenes para el trabajo en el extranjero en ausencia de oportunidades en el país.

“Hay tres amenazas principales para la seguridad alimentaria: la desigualdad, el papel limitado de los pequeños agricultores y el cambio climático”, concluye el informe elaborado por Gyan Bahadur Adhikari y Kritika Lamsal, de Rural Reconstruction Nepal. Para abordarlos, “el sistema alimentario debe basarse más en los derechos, estar menos basado en el mercado y estar más centrado en las personas y estar diseñado para tener en cuenta las perspectivas de las personas más pobres”.

En Nicaragua defender el agua es defender la vida

En **Nicaragua**, el punto de entrada es agua para el informe conjunto de la Coordinadora Civil y la Plataforma Nacional en Defensa del Agua y la Vida, “porque el acceso al agua es un derecho humano y uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Nicaragua está sufriendo una escasez de agua segura como resultado del efecto combinado del cambio climático que reduce el agua superficial y la extracción no regulada de agua subterránea por agroexportadores industriales y el turismo de enclave.

“El desarrollo humano sostenible -concluye el informe- mejorará la calidad de vida para todos si reduce la destrucción ambiental, limita la expansión agrícola y restringe la minería a cielo abierto que está agotando los recursos naturales, envenenando el agua y causando enfermedades y pobreza”.

Derecho al desarrollo negado en Palestina

En **Palestina**, el principal obstáculo para alcanzar estos objetivos y metas es la ocupación que continúa confiscando tierras y, como informa la UNCTAD, denegar a los palestinos el derecho humano al desarrollo.² Los indicadores son alarmantes: el desempleo alcanzó el 27,7 por ciento en los territorios palestinos ocupados en 1967 y el 44 por ciento en la Franja de Gaza. La tasa de pobreza para el año ha alcanzado el 29 por ciento en 2017 y es del 53 por ciento en la

Franja de Gaza, lo que refleja el efecto catastrófico del bloqueo continuo de 10 años.

Por otro lado, el informe de la sociedad civil del Monitor de Políticas Sociales y Económicas de Al-Marsad percibe los esfuerzos de la Autoridad Nacional Palestina como “reproducción de las mismas políticas y prácticas”, sin los cambios que se requerirían para avanzar hacia los ODS “. particularmente empleo y trabajo, protección social, impuestos progresivos, desarrollo industrial y agrícola, y gasto público “. La sociedad civil percibe que su espacio se está reduciendo, mientras que la Autoridad “toma el control de la judicatura y se afilia con el sector privado”.

Catástrofes naturales y financieras en Puerto Rico

Desde **Puerto Rico**, la organización de mujeres Cohitre también describe una “condición colonial que impone agendas ajenas a nuestro pueblo”. En septiembre de 2017, los huracanes Irma y María llegaron a la isla, destruyeron 70,000 casas y colapsaron su red eléctrica (aún no completamente restaurada), su sistema de transporte, hospitales y suministros de combustible y alimentos.

Los efectos catastróficos se agudizan por la ausencia de poderes políticos -la isla es un “territorio no incorporado” de los Estados Unidos. Desde 1898- y el control de sus finanzas por un Consejo de Control Fiscal impuesto por los Estados Unidos, debido a su endeudamiento. “La desviación de fondos para pagar deuda pública, planes de ajuste, medidas de austeridad, la reducción del sector público y la privatización han comprometido la capacidad del gobierno para responder a la crisis” mientras “la respuesta del gobierno de los Estados Unidos es lenta, errática y centralizada” y el Congreso de Estados Unidos “no ha mostrado apuro por proporcionar ayuda a Puerto Rico, dado el debate sobre la corrupción y la forma de administrar los fondos”.

Se estima que más de cien mil personas (3% de la población) han migrado después de los huracanes, ya sea por razones de salud (buscando servicios médicos apropiados), por razones de educación (escuelas cerradas) o en busca de un empleo (debido a problemas económicos). colapso y pérdida de empleo) y

² Véase: UNCTAD (2018): Los costos económicos de la ocupación israelí para el pueblo palestino y su derecho humano al desarrollo: dimensiones jurídicas. Ginebra. (<http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2044>)

“especialmente debido a una política de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) de los EE. UU. que estimula la migración”.

Los grupos de la sociedad civil demandan la eliminación de la Junta de Control Fiscal que menoscaba la democracia y que “el pago a los acreedores no sea superior al pago de los gastos ordinarios del gobierno que benefician directamente a la población, lo que genera un problema de derechos humanos”.

Perú no puede implementar

Perú se vio afectado por desastres naturales hace más de un año, cuando las fuertes lluvias e inundaciones afectaron a 21 de sus 25 departamentos. A partir de mayo de 2018, miles de familias aún viven en tiendas de campaña y muchas escuelas y hospitales no se han recuperado por completo. De hecho, muchas familias aún no han recuperado sus casas, destruidas por un terremoto en 2007, ¡hace más de diez años!

Perú es parte del “Anillo de Fuego” alrededor del Océano Pacífico, propenso a los terremotos y la actividad volcánica. Es más vulnerable a las alteraciones inducidas por el cambio climático en las corrientes oceánicas, causando inundaciones en el norte del país y sequía en el sur y el centro. Según el informe del Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESPE) y la red intercontinental para la promoción de la economía social y solidaria (Ripess) “la falta de planificación en el uso de la tierra para la vivienda y ocupaciones lideradas por delincuentes de terreno inadecuado para establecer los barrios marginales empeoran el problema. Capturado por la corrupción, el estado peruano es demasiado débil para implementar políticas públicas, prevención de riesgos, asistencia de emergencia o rehabilitación y reconstrucción”.

En 1990, cuando comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales, la pobreza afectó al 24 por ciento de la población. La encuesta de hogares de 2018 sitúa la pobreza de ingresos en 21.7 por ciento. Perú ha vendido a precios desorbitados sus empresas estatales y ha entregado todos sus recursos naturales para reducir la pobreza a menos del tres por ciento”, comenta el líder de la ONG, Héctor Béjar. “La Agenda 2030, desde

esta perspectiva, parece una utopía hermosa pero inalcanzable”.

La transición dejó a muchos atrás en la Chequia

En la **República Checa**, el problema social más urgente es el grado de endeudamiento de los hogares y la frecuencia de las incautaciones de propiedades relacionadas con la deuda, que afecta a más del 8 por ciento de la población. Los costos presentados por las agencias de cobranza privadas por sumas a menudo menores han privado a cientos de miles de personas de sus propiedades y, a menudo, las han obligado a estar al borde de la sociedad o incluso sin hogar.

Sin embargo, Ondřej Lánský y Tomáš Tožička informan en nombre de Social Watch-República Checa que “la derecha política conservadora y liberal que hasta ahora ha dominado el discurso público durante las últimas tres décadas sigue repitiendo que estamos viviendo en los mejores tiempos y que todos son acomodados. Por lo tanto, se olvida a una gran parte de la sociedad que perdió en la transformación hacia una economía de mercado. Perdieron en el sentido de que carecían de valores económicos que solían estar en su lugar, y como resultado de la degradación social directa. Pero la mayor parte de la academia y las elites culturales se negaron a prestar atención a los problemas sociales. La mayoría de las iglesias y ONG se centraron en proporcionar asistencia paternalista a los más vulnerables, manteniendo la lógica de la responsabilidad individualista. ‘Nuevos políticos’ provenientes de los círculos oligárquicos se están aprovechando de tales sentimientos, prometiendo más dignidad a las clases bajas y medias, a menudo fuera de los centros urbanos”.

Desafíos en Chipre

Las circunstancias parecen más prometedoras en **Chipre**, donde la crisis financiera de 2013 parece haber terminado y las ONG trabajan junto con el gobierno y el parlamento para implementar los ODS, según lo informado por Charalambos Vrasidas y Sotiris Themistokleous, de CARDET. Sin embargo, incluso cuando se observan progresos en todos los ODS y se lleva a cabo la planificación, la revisión oficial reconoce importantes desafíos: “Alta deuda pública,

alta tasa de desempleo, baja contribución del sector agrícola en el PIB, baja representación de las mujeres en la política y la vida pública, la necesidad de una política de consumo sostenible, un alto porcentaje de no logros en matemáticas, ciencias y lectura y la necesidad de aumentar la AOD”.

Obras, obras y más obras en Filipinas

En **Filipinas**, con un enorme mandato para respaldarlo, el gobierno del presidente Rodrigo Duterte (referido localmente como ‘DU30’ porque esa sigla suena como ‘Duterte’ al ser leída en inglés) emprendió un objetivo a largo plazo consistente con la Agenda 2030, que promete poner fin a la pobreza para 2040 y construir una sociedad más justa, próspera, estable y pacífica a través del crecimiento económico inclusivo que tenga en cuenta los límites ambientales.

Dos años después, Isagani Serrano, presidente del Movimiento de Reconstrucción Rural de Filipinas y coordinador de Social Watch Filipinas, informa que “DU30 parece estar en camino con su objetivo de crecimiento económico anual del 7-8 por ciento debido a una inversión masiva en infraestructura que representó el 5.4 por ciento del PBI en 2017. El impacto negativo de este programa, específicamente la conversión a otros usos de la tierra de tierras de cultivo que ya están disminuyendo, aún no se ha determinado. Pero la infraestructura y los programas de energía y proyectos intensivos en combustible fósil podrían revertir los logros modestos logrados en la protección y rehabilitación del medio ambiente”.

Aún no se ha otorgado la máxima prioridad a la infraestructura liviana, como los caminos rurales, el agua y el saneamiento, y la electricidad del hogar, que impactan más directamente en la vida de los pobres y excluidos. Todavía no hay una indicación firme de si se logrará la reducción prometida de la pobreza del 21.6 por ciento al 14 por ciento para 2022, y cómo se logrará, pero el gasto en el sector social fue del 8.5 por ciento del PIB. Las remesas de los filipinos en el extranjero - un récord de US \$ 28.1 mil millones en 2017 - mantienen la economía principalmente financiando el consumo familiar y, potencialmente, el crecimiento de la economía local.

“El régimen que comenzó con una nota alta de consenso social ahora está siendo amenazado por la creciente polarización”, concluye Serrano. “Esto se debe en parte a un estilo de liderazgo abrasivo pero popular que es implacable con la oposición y que lleva rachas de autoritarismo. Detrás de tal polarización está la alta desigualdad continua que permite que un pequeño grupo de 16 familias multimillonarias y sus aliados políticos en todo el espectro político, que representan menos del 1 por ciento de la población, tengan tanto poder y riqueza a costa de tantos”.

Las mujeres lideran la lucha en Tailandia

Escribiendo desde **Tailandia**, Ranee Hassarungsee del Grupo de Trabajo de la Agenda Social considera imposible restringir el análisis dentro de las fronteras nacionales porque “la liberalización comercial en el proceso de globalización ha permitido a las empresas transnacionales explotar los recursos naturales ampliamente y profundamente a través de las fronteras, en connivencia con las élites nacionales. Las políticas de recursos naturales a nivel nacional tienen implicaciones en otros países ya que las agencias estatales, el capital monopolístico nacional y las corporaciones transnacionales han asumido papeles clave en la definición de varios aspectos de las políticas de desarrollo, en manufactura, energía, medio ambiente, uso de la tierra, etc. la moneda es que “el derecho de las personas a la autodeterminación está siendo restringido ya que su participación en la toma de decisiones se ve restringida”.

En el caso de Tailandia, “el Estado se ha convertido en una parte interesada conjunta, ya sea como accionista principal o como dueño del capital en sí mismo. Cuando el gobierno está bajo el control absoluto de los militares y las personas se ven privadas de sus derechos democráticos para exigir responsabilidades, expresar opiniones, no criticar, ni acceder a la información, los problemas del manejo de los recursos naturales se vuelven aún más complicados. El gran capital monopolista nacional y las corporaciones que dependen del apoyo militar están uniendo esfuerzos con corporaciones extranjeras para fortalecer su acceso y control de los recursos del país, creando así más injusticias en la sociedad tailandesa”.

La invasión de las tierras agrícolas de los pobres, la expansión de las industrias en la base de recursos alimenticios de la población local, la sobreproducción y la expansión de las fuentes de energía aumentan las amenazas de sequía, inundaciones repentinas, tormentas severas, lluvias torrenciales y temperaturas extremas. “En esta convergencia de una crisis socioeconómica y una crisis ecológica, han surgido diversos grupos de mujeres que lideran las luchas para defender los recursos naturales y los medios de subsistencia de sus familias y comunidades”.

Si también se apropió de las bases de todo el mundo, la Agenda 2030 pasará de ser un sueño utópico a ser una fuente de esperanza.

Roberto Bissio es Director Ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo y coordinador de la red de Social Watch.